



Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the [license](#). [Advertencia](#).

Usted es libre de:

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato

Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente.

La licenciente no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia



Bajo los siguientes términos:



Atribución — Usted debe dar [crédito de manera adecuada](#), brindar un enlace a la licencia, e [indicar si se han realizado cambios](#). Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciente.

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales ni [medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia](#).

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

El desplazamiento forzado en Colombia y su protección a la luz del Derecho Internacional Humanitario

Andrés Fabián Fuentes Torres¹

Resumen

Por décadas, Colombia se ha visto gravemente afectado por la ola de violencia perpetrada tanto por grupos ilegales armados, como por las fuerzas regulares del Estado lo que ha desembocado en una migración obligada de su población campesina hacia las ciudades, población desplazada víctima del conflicto armado ante un panorama que no parece tener fin. Lo anterior, conlleva a la pregunta acerca de cuál ha sido el papel del derecho internacional humanitario DIH, ante el conflicto armado del país. Los efectos que ha tenido la población campesina a raíz del desplazamiento forzado están vinculados a la pérdida y desarraigo de sus seres queridos, así mismo, las pérdidas económicas ante la necesidad de dejar sus tierras, no menos importante, el impacto que puede tener el conflicto ante el desarraigo de sus raíces y cultura. El Estado colombiano tiene como obligación la defensa de los derechos de las personas, así mismo, reparar e imponer sanciones en los casos de violaciones al DIH, las cifras presentadas aquí muestran una radiografía de algunas de las situaciones de conflicto por las que atraviesan las personas desplazadas en Colombia.

Palabras Clave: Desplazamiento forzado, protección internacional, conflicto armado, reconocimiento de derechos, dignidad.

Abstract

*Estudiante de Maestría en Derecho de la Universidad Católica de Colombia; Coordinador Jurídico Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo del Ministerio del Deporte; Profesor de Derecho Administrativo y Constitucional; Email: fuentestorresandresfabian4@gmail.com. Trabajo dirigido por la Dra. Ivonne Patricia León, docente de la Universidad Católica de Colombia.

For decades, Colombia has been experiencing an armed conflict that has generated the forced displacement of its population, who find themselves displaced, persecuted by violence in a scenario that seems to have no end. This leads to the question of what has been the role of international humanitarian law in the country's armed conflict. The effects that the peasant population has had as a result of forced displacement are linked to the loss and uprooting of their loved ones, as well as the economic losses due to the need to leave their land, and not least, the impact that the conflict can have on the uprooting of their roots and culture. The defense of human rights is an obligation of the State, as well as reparations and the imposition of sanctions in cases of violations of international humanitarian law. The figures presented here show an x-ray of some of the conflict situations that displaced persons in Colombia are going through.

Keywords: Forced displacement, international protection, armed conflict, recognition of rights, dignity.

Introducción

El conflicto armado colombiano que ha tenido lugar por más de cincuenta años y la violencia inhumana que ha predominado en mucha parte de la geografía colombiana, han sido entre otras las causas originadoras del desplazamiento forzado. Trabajadores independientes, campesinos, líderes sociales, líderes sindicales, dirigentes políticos, entre otros han sido víctimas de este conflicto. El método utilizado por los agresores del orden y de la institucionalidad han sido la presión, los actos violentos y los éxodos sobre la población para poder obtener entre otras cosas el dominio sobre la tierra, la extorsión económica, la afectación sobre la población civil y los daños materiales sobre sus bienes.

La violencia que ha predominado en distintas partes del país, ha hecho que mucho de sus víctimas se vean en la imperiosa necesidad de trasladarse a cascos urbanos y a ciudades en buscando mejores condiciones de vida. En algunos casos, se han originado afectaciones afectivas, ya que les ha tocado vivir el desprendimiento de su seno familiar o peor aún la pérdida de sus seres queridos.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1998), el desplazamiento forzado está constituido por el grupo o grupos de personas que por algún motivo son obligadas a salir de sus residencias habituales abandonando sus territorios, con todo lo que ello implica, como única opción ante la amenaza y coerción de los grupos irregulares armados que se encuentran participando en un conflicto.

El éxodo producto de la violencia ha sido uno de los principales flagelos del Estado colombiano; el modelo económico existente entró en crisis desde los inicios de los 80, se agudizado por una ola de terrorismo, perfilándose como uno de las causas de gran magnitud del conflicto vigente y que vale la pena analizar cuál fue el tratamiento que le dieron las autoridades colombianas a este fenómeno. Lo que también conlleva a otra pregunta sobre cuál ha sido la protección del derecho internacional humanitario a las víctimas del desplazamiento forzado durante conflictos internos.

Es de anotar que los efectos para la población campesina colombiana a causa del éxodo obligado están asociados a la pérdida o abandono de sus seres queridos pues en muchos de los casos debía irse el jefe del hogar o los hombres dejando básicamente a su núcleo familiar por lo general mujeres, niñas y adolescentes en medio del conflicto, como también a las pérdidas económicas ante la inminente necesidad de salir dejando sus tierras y propiedades lo que ha conllevado a un éxodo colectivo a distintos lugares de la geografía colombiana y del mundo entero, todo eso aunado al conflicto que se genera entre sus costumbres y arraigos culturales.

Bajo este estado de las cosas el presente artículo busca presentar un marco teórico y conceptual sobre el fenómeno del éxodo obligado de una gran parte de la población en Colombia, las principales causas originadas como resultado de la guerra en el país y su tratamiento a la luz del derecho internacional humanitario, por ello se parte de la siguiente premisa: El desplazamiento forzado ha sido considerado como una de las mayores tragedias que ha vivido Colombia y su sociedad a lo largo de los años, arrojando como tal implicaciones y consecuencias negativas en todos los aspectos para los ciudadanos.

Lo anterior permite realizar un estudio profundo acerca de las causas originadoras de este flagelo, que tanto daño le ocasionó al país y al mismo tiempo determinar el papel del Estado Colombiano y de sus autoridades frente a las víctimas del conflicto y finalmente precisar cuál ha sido la protección del DIH frente al desplazamiento que ha tenido lugar en el transcurso del conflicto armado en Colombia y cuales han sido las herramientas jurídicas de protección hacia la población, tanto nacionales como no nacionales.

En Colombia el desplazamiento existe desde hace décadas, la historia del país se ha vuelto inmersa en este flagelo con el agravante que con el paso del tiempo se ha ido agudizando. La disputa a raíz del dominio sobre los territorios, la represión, el señalamiento a individuos o grupos de individuos a causas ideológicas o políticas han sido dos de las causas más considerables por las cuales se genera el abandono obligado de las poblaciones en la historia del país.

Los recursos y métodos tenidos en cuenta para elaborar este escrito se hicieron a través de una revisión bibliográfica bastante amplia y profunda de diversos autores que han estudiado y escrito sobre el tema, hallándose información teórica, conceptual y estadística que permitiera hacer un análisis acorde con los objetivos planteados y los resultados esperados.

CAPITULO I

Antecedentes del desplazamiento forzado en Colombia

El desplazamiento forzado en Colombia ha sido un fenómeno de gran importancia que marcó la vida de muchos de los habitantes del territorio nacional. Es tanta la importancia de dicho fenómeno y de sus incidencias en la vida civil de las personas, que sigue siendo objeto de estudio por parte del DD. II; sujeto de instrumentos internacionales de protección. La incidencia en todos los sectores sociales de la sociedad, víctimas de la violencia, de la guerra humana, de los desplazamientos de sus poblaciones a otros lugares del país y territorios extranjeros, homicidios colectivos y ataques sin piedad hacia una población ajena a toda confrontación bélica y violenta y al conflicto armado.

El fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia constituye un hito para la historia del país, ya que miles de personas fueron víctimas de dicho fenómeno y fueron objeto de la confrontación bélica que lideraban los actores del mismo, en donde predominó el éxodo de campesinos de sus parcelas a las grandes ciudades y territorios, muchos de ellos abandonados por el aparato estatal y sus autoridades Sin embargo, Colombia avanzó normativamente hablando e incluyó en su sistema jurídico, herramientas de protección y amparo para estas personas, quienes fueron sometidas a un estado de indefensión y de desprotección por aquellos que hacían parte de los grupos armados de la época a lo largo de los años.

El desplazamiento forzado en Colombia se remonta aproximadamente al año 1985, que fue un periodo crítico, donde se incrementó y se hizo casi que institucional en la historia política del país estos hechos violentos y de criminalidad que únicamente iban en detrimento de la población civil, campesinos, líderes sindicales, sociales, indígenas, políticos, militares, de la fuerza pública, con el único fin de deslegitimar la institucionalidad y a sus autoridades. El actuar de los delincuentes era desmedido e inhumano, ya que sus actos violentos eran considerados en algunas ocasiones como de lesa humanidad, ya que se atacaban a grandes urbes con consecuencias fatales de gran consideración. (Marín, 2017).

Las principales causas y motivos que dieron origen a esta migración obligada tan marcado fueron la disputa por el control y posesión de la tierra, de latifundios y el ataque, las agresiones y la persecución por temas políticos e ideológicos. Sin echar de menos importante, la búsqueda de unas mejores condiciones de vida a centros poblados y de gran infraestructura educativa y económica. A muchas de las personas que fueron víctimas del desplazamiento, no les quedaba otra alternativa si no la de emigrar a otras urbes en busca de mejores condiciones de vida y otras alternativas de trabajo ante el desplazamiento forzado de que fueron sujetos por parte de estos grupos criminales. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015)

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2015, pág. 41):

[...] “Desafortunadamente para la memoria del país, debido a que el desplazamiento pasó sin reconocimiento alguno, sin una definición jurídica, sin que fuese tipificado como delito, y sin mecanismos ni formas institucionales de interpretarlo, entenderlo, atenderlo y repararlo, no es posible determinar con precisión la magnitud ni la evolución histórica del desplazamiento forzado durante la mayor parte del siglo XX”.

Un hecho histórico que marcó gran importancia en la historia política del país, y que tuvo incidencia en estas manifestaciones de violencia, fue el asesinato del líder político Jorge Eliecer Gaitán, episodios que fueron generadores entre otras causas, de un conflicto violento por más de 50 años, principalmente entre conservadores y liberales y que se fue expandiendo a otros lugares de la geografía colombiana y que dejaron un saldo aproximado de 300 personas fallecidas, principalmente comerciantes, artesanos y campesinos, quienes fueron perseguidos por la actividad económica que desempeñaban en el momento. (Giraldo, 2008)

Otro hecho que dejó muchas huellas en esas manifestaciones violentas de la época, fue la desestabilización agraria, ya que la propiedad privada se vio afectada por el actuar violento de los actores del conflicto, que en muchos casos sacaban y expulsaban de las tierras a campesinos y trabajadores inocentes de todo conflicto, ajenos a toda confrontación ideológica o política, solo se dedicaban a trabajar sus tierras, cultivar y sobrevivir de lo que producían sus cosechas y ventas de sus productos en los cascos urbanos. Gracias a la comercialización de sus productos, podían obtener sus alimentos y poder educar a sus hijos a pesar de las limitaciones de seguridad y de violencia que reinaban en la época. (Ruiz, 2011)

La anarquía en la gobernabilidad del país y la violencia recrudecida se constituyeron en los pilares para perpetrar el golpe de Estado en cabeza del general Gustavo Rojas Pinilla en 1953, y la creación del Frente Nacional, apoyado por las elites liberales. Los acuerdos entre liberales y conservadores para la alternancia del poder, aunque permitieron reducir la violencia producto del bipartidismo, llevaron a la marginación de otros sectores tradicionalmente excluidos de la vida política. El descontento de estos sectores tuvo como resultado la aparición de un movimiento insurreccional que se manifestó en la aparición de los grupos guerrilleros (Giraldo, 2008, pág. 227).

La década de los 60 vivió, al igual que muchos otros países de la región, un proceso de urbanización y de modernización. En esta etapa, tiene lugar un proceso de migración de personas de las zonas rurales a las ciudades. Sin embargo, en Colombia, dicha movilización tenía como trasfondo el incipiente conflicto que asolaría al país en las próximas décadas.

El aumento del desplazamiento forzado que para mediados de los 80 fue evidente a causa de la exacerbación de la guerra, marcó la vida nacional durante las décadas siguientes. A partir

de entonces Colombia se sumerge en esta guerra que ha sido protagonizada por diferentes actores. Estos eventos y circunstancias fueron generados por las pugnas por asumir el control de la tierra, el control político, el control ideológico y social de las comunidades mediante la amenaza, la coerción y por las vías de hecho (Marín, 2017).

Es decir, estos nuevos hechos y episodios que juegan un papel de transcendental importancia en la historia violenta del país. Se trata de la aparición e incursión de los grupos paramilitares y la influencia en el aparato económico del Estado del narcotráfico, ya que estos últimos se convirtieron en multiplicadores y generadores del conflicto al propiciar la creación de verdaderos monopolios económicos y de riquezas al pagar a ejércitos privados y particulares para la defensa de sus bienes y de sus riquezas, fortaleciendo con esto unas verdaderas empresas criminales y organizadas, que atentaban contra el orden legítimo estatal (Marín, 2017).

De todo lo anterior se puede decir que en la historia de la violencia y que han propiciado el desplazamiento forzado en el país, han participado diversos actores: la guerrilla, las AUC, grupos ilegales y de fuerzas regulares del Estado, quienes actuaban de manera independiente y cada uno con unos objetivos e ideales diferentes, pero con la una misma causa: atacar a la población civil indefensa, entre ellos, campesinos y sus familias, principalmente, quienes de manera obligada y forzosa se vieron obligados a abandonar sus territorios por la presión de estos integrantes, quienes actuaban de manera inhumana e inmisericorde.

La guerrilla era el primer actor entre quienes los que participaron en esta guerra indiscriminada con un 32%, la Fuerzas del Estado con 27% y las autodefensas con 21%. Sin embargo, estos porcentajes cambiaron entre 1995 y 2001 por cuanto las AUC protagonizaron con un 46% en más desplazamientos, pasando los grupos guerrilleros a un segundo plano con un porcentaje del 12%. A partir del 2002, la participación de las autodefensas disminuyó a un 26%, pero los enfrentamientos entre este grupo y las guerrillas, a raíz de la intensificación del conflicto, constituyeron la principal fuente de desplazamiento con un 43%. (Ibáñez, Moya, pág. 37, 2007)

Posterior a lo antes esbozado, es importante tener como referencia la transición que se vivió en el país de la zona rural a la zona urbana. Como consecuencia de los desplazamientos

masivos que les tocó vivir a muchos de los pobladores de las zonas rurales a los cascos urbanos, se generó una expansión y un crecimiento de las grandes ciudades y de las cabeceras urbanas, ya que el éxodo del campo de estas personas a las grandes urbes, permitió la generación y creación de una sobrepoblación (Niño, 1999), dando lugar por ende al nacimiento de una desorganización territorial y masiva de las ciudades, generándose un caos, tanto en lo económico como en la prestación eficiente de los servicios públicos.

El estudio realizado por este autor (Niño, 1999), establece que:

“En 1938 solamente el 30.9 por ciento de la población colombiana residía en las áreas urbanas, cifra que ascendió al 39.6 por ciento en 1951, al 52.1 por ciento en 1964 luego al 63.1 por ciento en 1973, posteriormente al 67.2 por ciento en 1985 y al 72.3 por ciento en 1994. Para el año dos mil se estima que la proporción de población urbana en Colombia será del 78.9 por ciento, con todas las consecuencias que se derivan de una ocupación desordenada y masiva de las ciudades, en cuanto a la prestación de servicios públicos y satisfacción de necesidades básica”.

En Colombia el fenómeno del desplazamiento forzado, con las consecuencias negativas ya conocidas, se irradia con mucha fuerza y con efectos negativos aproximadamente en el año de 1985 y es allí cuando empieza a tomar fuerza este conflicto interno (Mendoza, 2012), convirtiéndose como hecho normal en el país, mas no aceptado, el cual desencadenó el fortalecimiento de los grupos de paramilitares y de guerrilleros. Ambos en contra del régimen estatal y de sus autoridades, con el fin de implementar la anarquía y el desconocimiento del orden legitimo legalmente establecido.

Una vez toma más fuerza el desplazamiento forzado en Colombia, se genera un crecimiento de los grupos armados, se recrudece entonces una búsqueda de nuevos actores, principalmente jóvenes campesinos, que, en su búsqueda de mejorar sus condiciones de vida, son vinculados a estas campañas violentas y de deslegitimación del orden y la seguridad estatal. Luego de originarse esta expansión y crecimiento, a los campesinos y parceleros no les queda otra alternativa y es la de huir a los pueblos más cercanos y grandes ciudades, conllevando a una masificación colectivas en estas últimas y apareciendo entonces las invasiones en condiciones de miseria y de extrema pobreza en las capitales, es decir, ya se

genera un problema de índole social y cultural. La incapacidad del Estado de dar respuesta a las necesidades económicas de la población, principalmente en las áreas rurales, lleva a muchas personas en su desesperación a dedicarse a los cultivos ilícitos, o a buscar el amparo de los grupos criminales. Esto a su vez produce un aumento de la violencia, que tiene un impacto negativo en la economía. Se produce así un círculo vicioso interminable (Garrido, 2001).

La presencia de diversos grupos armados organizados en guerrillas con variadas ideologías, posiciones políticas, aunado a la delincuencia común organizada y financiada por el narcotráfico y terratenientes en aras de asumir o reasumir la posesión de las tierras, le dan una particularidad a Colombia en el contexto mundial de la guerra que expulsa a gran parte de su población y que por muchos años no tuvo la relevancia ni el reconocimiento requerido por cuanto se tomaba como una problemática interna de los países y no hacia parte de la agenda internacional.

En Colombia, a partir de la década de los noventa, los hechos de violencia y de desplazamientos masivos se incrementan, siendo los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cesar y Córdoba los de mayor afectación por este fenómeno. Resulta oportuno acotar que, en estas regiones del país, los grupos subversivos y violentos fueron donde más desplegaron su actuar violento y represivo hacia la población civil, ocasionándoles grandes perjuicios, tanto en lo económico como en lo productivo. Sería en esta década donde inicia la preocupación nacional por el problema del desplazamiento y su reconocimiento oficial, a partir de trabajos realizados por la iglesia católica, que dieron lugar a que por primera vez este problema entrase al debate público (Juliao, 2012).

Según la Red Nacional de Información Colombia alcanzó un total de 8 millones de víctimas (Red Nacional de Información, 2020), ocupando el segundo lugar en el mundo con desplazados internos, después de Siria, que tiene 13 millones de desplazados forzosos (El Tiempo, 2019). Hay que destacar que durante el transcurso del conflicto armado interno el desplazamiento forzado no estaba dentro de las prioridades de los temas de Estado por considerarse como una consecuencia de efecto secundario y no una consecuencia directa del conflicto y su impacto en la comunidad.

CAPITULO II

Población colombiana víctima del desplazamiento forzado interno: Desarraigo en sus costumbres y su cultura

En Colombia hay una particularidad respecto al desplazamiento forzado caracterizada por su situación de víctimas del conflicto como si lo único que importase es haber nacido y tener arraigo a su territorio y a su condición de campesinos, de hacer parte de una población ubicada en un espacio de interés para el grupo armado de turno (Naranjo, 2001). Pues los desplazados están constituidos por grupos de personas que no tienen muchas cosas en común, muchos elementos que los caractericen, los homogenice o los demarque como objetivo militar, es decir, que les asemeje una identidad, una etnia, un grupo o partido político, una ideología, ni siquiera una corriente en común.

Los campesinos y personas pertenecientes a comunidades étnicas, afro-colombianas e indígenas constituyen el 70% de las víctimas de desplazamiento. En particular, las mujeres, niños, niñas y adolescentes, los indígenas y los afrodescendientes representan la población más afectada por este fenómeno. El caso de los menores de 18 años es especialmente lamentable, siendo un 55% del total. Al desglosar esta cifra se encuentra que un 12.72% son menores de 5 años, un 19.78% se encuentra entre los 5 y 10 años, un 12.78% para víctimas entre 11 y 14 años mientras que el 9.03% restante corresponde a los menores de entre 15 y 18 años (Gómez, Astaiza, de Souza, 2008)

Una connotación propia del éxodo que se produce internamente en el país tiene que ver con la diversidad de quienes lo padecen, esto es que no discrimina edad, género, a qué etnia pertenece, nivel educativo (Centro de Nacional de Memoria Histórica, 2015), religión o incluso si tienen o no partido o posición ideológica lo que influye en la divergencia sobre la forma cómo este grupo de personas se cohesiona con los habitantes de los territorios que los asumen, específicamente con la población pobre por cuanto llegan en condiciones aún más desfavorables por no contar con garantías tales como estar inscritos en la base de datos del SISBEN², recibir los beneficios de la entidad territorial, incluso carecer de documento de identidad. Además, prácticamente la imposibilidad de acceder los sistemas de salud y

² Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

educación lo que desemboca en la desfavorabilidad en su inmersión a la sociedad y en la identificación de los hechos generadores para las víctimas.

El éxodo interno se ha caracterizado por la violencia con la que se ha despojado a la población civil de sus tierras, existiendo a lo largo del conflicto periodos de recrudecimiento del fenómeno, así como por la concurrencia de una multiplicidad de actores e intereses involucrados en los procesos de desarraigo que han afectado la guerra y sus efectos sobre las víctimas. Estas consisten en “millares de hombres y mujeres sin ninguna identidad colectiva previa” quienes huyen en la defensa de sus vidas, ante las amenazas que traen la violencia y el terror generado en los alrededores. (Gómez, Astaiza, de Souza, 2008 pág. 1658)

Es tan complejo el tema en Colombia que en muchas ocasiones no se alcanza a identificar quienes cometen la acción y sus motivaciones por cuanto quienes son expulsados de sus propiedades pueden ser blanco de la guerrilla, los grupos paramilitares, las autodefensas, las fuerzas del Estado e incluso grupos al margen quienes lo hacen con fines netamente económico, es decir apropiarse de las tierras, saldar deudas, represalias por problemas personales, entre otras.

Los hechos criminales perpetrados por las fuerzas marginadas del Estado han sido realizados prácticamente con el beneplácito de algunos estamentos del gobierno, está más que comprobada la participación de las fuerzas militares en aras de preservar un modelo de desarrollo que desconoce los efectos de la guerra y que pasa a ser hechos revictimizado, sin restablecimiento, sin reparación de la transgresión de derechos quebrantados.

La frecuencia en la ejecución del éxodo no consentido tiene que ver con ocupación de los territorios, el desaojo y la retención de bienes y activos que le permiten a los grupos armados ilegales ampliar sus zonas de control, sumado a esto se encuentran los cultivos ilícitos, el auge del narcotráfico, así como el desmembramiento de los entramados sociales tan necesarios para las personas. (Mendoza, pág. 173, 2012). Producto del análisis realizado por este autor, se pudo constatar que hay departamentos y zonas del país con gran influencia de fuentes naturales y con gran desarrollo en infraestructura vial y energético, zonas en las cuales se llevan a cabo varios megaproyectos y es donde se observa que una presencia fuerte del desplazamiento forzado, como el Urabá Chocoano y en la zona de la represa de Urra.

Adicionalmente, uno de los tantos efectos ocasionados por el conflicto armado es que cuando los grupos armados aparecen en una zona determinada de país, sus pobladores son señalados inmediatamente de ser auxiliares y cooperantes de esos grupos, razón por la cual se ocasionan muchos homicidios y muertes de manera injusta.

Efectos y consecuencias del desplazamiento forzado en las víctimas

La ONU (1998) define los desplazados internos como:

"las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado, o para evitar los efectos, de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida".

Jurídicamente le corresponde al Estado generar las normas y la regulación que les ha de regir a fin de evitar todo hecho generador de violencia, terrorismo, violación a los derechos fundamentales bajo los parámetros de proteger y resguardar la vida y la dignidad humana, garantizando la existencia de instancias, autoridades y estamentos para cumplir con este deber.

En Colombia, la Corte Constitucional mediante sentencia T-025 de 2004, con ponencia del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, establece que:

1. El desplazamiento forzoso es una violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, en su condición de desplazados la población víctima se ve abocada a sufrir no solamente las circunstancias propias de su condición de abandono de su sitio de residencia y de trabajo, sino que, además, hacen imposible el ejercicio del derecho a escoger el lugar de domicilio.
2. La vulneración de los derechos individuales y colectivos relacionados con la vida, la salud, la paz, la integridad y la seguridad personal producto del éxodo forzado ante las agresiones, las intimidaciones de que son víctimas además de las precarias condiciones que genera la migración aunado a las condiciones desfavorables que por lo general existen en los municipios receptores.

3. La Constitución Política de Colombia incorporó una serie de derechos en pro de la preservación de la vida y la dignidad de la población, como la alimentación, la educación, vivienda digna, servicios de salud, los cuales son violados, quebrantados a quienes son obligados a salir de sus poblaciones y que les cambia drásticamente su vida e incluso hasta la de sus generaciones.
4. El trágico proceso de desplazamiento trae consigo el desarraigo, la pérdida de identificación de las comunidades a causa de la falta de los documentos que les dieran el reconocimiento a su personalidad jurídica.

La sentencia igualmente analiza la jurisprudencia colombiana en materia de desplazamiento para concluir que existe una obligación del Estado la restitución de los derechos de las víctimas de desplazamiento. No obstante, el magistrado reconoce la imposibilidad para el Estado de realizar una plena restitución a los millones de ciudadanos desplazados, por limitaciones de índole económico, institucional y humano. Sin embargo, el Estado debe proceder a atender las necesidades más urgentes de los grupos más vulnerables, pero asegurándose que todas las víctimas puedan ejercer sus derechos fundamentales como la vida, libertad, dignidad e integridad (Arango, 2007).

El cuento de nunca acabar que deben soportar los campesinos, los afrodescendientes, los indígenas que han sido obligados a dejar sus territorios, pertenencias, sus vidas, sus experiencias, es decir todo el acervo adquirido se une muchas veces a la pérdida de identidad, la baja moral, la conmoción por la exclusión, la indiferencia e incluso el desconocimiento ante la comunidad y sobre todo de las autoridades territoriales es lo que define el desarraigo al que se someten.

Igualmente, los grupos armados han empleado diferentes técnicas para generar terror en la población y consolidar su dominio sobre los territorios en los que se mueven. Estas incluyen la imposición de toques de queda, la prohibición de entrada y salida de la población, la extorsión, la siembra de minas antipersonales, la apropiación de territorios, el reclutamiento de menores, las ejecuciones y la violencia sexual. Esto conlleva a una segunda dimensión del desarraigo, que va más allá del ámbito físico a un ámbito psicológico, la transformación del

territorio que en la mente de los civiles pasa a convertirse en un espacio hostil asociado a las acciones terroristas del grupo (Villa, 2006).

Según Amnistía Internacional (1997):

[...]”las causas del desplazamiento forzado también son diversas: las presiones por la tierra, los intereses que van surgiendo en torno a los megaproyectos del estado o la lucha por el control sobre zonas ricas en metales preciosos y productos energéticos o por territorios donde se cultiven plantas alucinógenas y en general, toda una gama de intereses particulares imbricados y confundidos con los asuntos de la guerra pública sin que sea posible establecer una línea diferencial entre lo político - militar y lo individual privado”.

Las consecuencias humanitarias de la guerra por el desplazamiento forzado son profundas por el cambio en la calidad de vida para quienes llegan a las poblaciones más cercanas a engrosar los cordones de miseria. Aunado a que los mandatarios territoriales no tienen las herramientas de políticas públicas, y sobre todo el presupuesto necesario para asumir y hacer frente a los desafíos creada por la población que arriba víctima del desplazamiento al incrementarse la necesidad de proveer casas, terrenos para construcción, agua potable, saneamiento, acceso a la salud, a la educación, la recreación, la cultura y el esparcimiento sano en condiciones óptimas.

Ruiz (2007), expone que el fenómeno en la recomposición de las zonas urbanas en las grandes y medianas ciudades por la forma como se distribuye la población pobre ante el arribo de los que provienen de las zonas rurales quienes llegan a aumentar los cinturones de miseria presentan en algunos casos características similares a las que tenían en sus lugares de origen, es decir en ningún momento mejoran su situación, sino todo lo contrario ésta se agravia.

También señala Ruiz (2007) que según datos del 2004: “el mayor número de desplazados (68%) provienen de municipios de menos de 50 mil habitantes, caracterizándose estos flujos migratorios por: uno, movimientos que se dirigen preferiblemente a las grandes y medianas ciudades; 52% de los migrantes llegan a ellas. Segundo, dicha comunidad establece su lugar de residencia en las zonas más deprimidas de estos centros urbanos y tercero, las cabeceras

urbanas de estos municipios las receptoras de la población migrante, representando un 32%”. (pág. 157)

Barreira, C., Tavares, J., Zuluaga, J., González, R., González, F., (2013) señalan que las guerrillas colombianas han elaborado su estrategia en base a la expansión y consolidación de su dominio territorial. Este énfasis en el aspecto territorial tiene como objetivo alcanzar la mayor cantidad de territorios posible, como parte de un esquema desestabilizador que pretende imponer su propio orden social en las zonas bajo su control. Todo esto sumado a factores relacionados a la economía de la guerra, la búsqueda de recursos y vías de suministro, y la defensa contra otros actores y las fuerzas del Estado.

La pérdida o muerte del padre o jefe de hogar quien por lo general es el generador del ingreso familiar redunda en un mayor impacto económico aunado a la pérdida de tierras cuyas consecuencias son significativas, con el agravante de que no pueden acceder a créditos bancarios, préstamos o cualquier tipo de crédito incluso informales pues no poseen una vivienda que los respalde, por no tener incluso bienes y algún tipo de activo.

El desplazamiento también conlleva pérdidas económicas para las víctimas. Estimaciones del año 2008 ubicaban la pérdida de activos físicos en el rango de 9,6 millones de pesos (aproximadamente US\$5.000) por cada hogar desplazado, esto sin contabilizar el valor de la tierra. En tanto, la recuperación de activos solo alcanza un promedio de \$100 mil pesos (cerca de US\$50) por hogar. Esto representa un duro golpe para las familias, principalmente del ámbito rural, que por lo general encuentran muy difícil el recuperar el estatus económico que disfrutaban previo al desplazamiento. (Ibáñez, Velásquez, pág. 19, 2008)

De acuerdo a un estudio realizado por Centro de Memoria Histórica, millones de colombianos de distinta edad, género, origen étnico y cultural, se han visto afectados por el desplazamiento forzado. Este delito constituye un daño irreparable a sus proyectos de vida, ha producido la desaparición de comunidades enteras, la separación de familias, la pérdida de vínculos históricos con las tierras que han ocupado sus antepasados y ha causado daños irreversibles a la sociedad colombiana (Centro de Memoria Histórica, 2015).

El conflicto armado, la guerra, afecta a la población no armada que no está participando del conflicto al restringirle oportunidades para acceder a los productos, servicios, emolumentos con los cuales puedan satisfacer sus necesidades de alimentación y sobre todo salud y educación. Generalmente quienes huyen del conflicto desplazándose a otras regiones suelen perder los documentos de identidad sin los cuales no les es fácil acceder a estos servicios básicos.

Aunado a ello se tiene que éste éxodo obligado quebranta la dignidad de las personas, la correlación que se debe generar entre esa dignidad con todos los derechos que les son propio como ser y la solidaridad (Naranjo, 2001). La protección legal y normativa que les asiste debe ir más allá que el amparo gubernamental es la protección y reivindicación de su bienestar económico, su vida social y cultural hasta lograr la inserción e inclusión a la vida política de su territorio. En otras palabras, el agravio moral consecuencia lógica de las pérdidas; la desestabilización económica, el desconocimiento social y la exclusión política, los daños morales causados, todos estos son elementos que afectan gravemente la vida, el destino de aquellos que son obligados a salir de sus territorios.

Como si todo lo anterior fuera poco, existe en Colombia un estado de impunidad, de desconocimiento e incluso arbitrariedad del gobierno y sus entidades en la asunción coherente, veraz y eficiente en el tratamiento y el esclarecimiento de quienes participan de manera abrupta, indolente y bárbara de los propiciadores de la guerra y por ende generadores de desplazamientos, quedando estas personas presas del abandono, enfrentando su tragedia, su propio drama, junto con sus familias, incluso sus vecinos y amigos, tragedia que es inimaginable por aquellos que no la padecen y que al ser contadas por quienes la viven debe quedar inscrita en la memoria del país.

CAPITULO III

Derechos de la población desplazada en Colombia y su protección en el marco del Derecho Internacional Humanitario

El derecho internacional humanitario (DIH) puede definirse como un conjunto de normas internacionales, ya sean de origen convencional (tratados, pactos, convenios, entre otros) o

consuetudinario (costumbre internacional) creados para la protección de los bienes y de las personas que son afectadas por conflictos armados, así como establecer límites a los que los actores del conflicto deben ceñirse en lo relativo a los métodos y medios empleados en las guerras (Bernal, Moya, pág. 141, 2013).

El Comité Internacional de la Cruz Roja adopta la siguiente definición:

“El Derecho Internacional Humanitario DIH es el conjunto de normas que, en tiempo de conflicto armado, procura, por razones humanitarias, proteger a las personas que no participan o que ya no participan directamente en las hostilidades y limitar los medios y métodos de hacer la guerra. Con este fin, el DIH establece las normas mínimas de comportamiento humano que se deben observar en cualquier situación de conflicto armado. La finalidad de esas normas es, entre otras, proteger a las poblaciones civiles y sus medios de supervivencia”. (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2004)

Visto los conceptos expuestos, es importante hacer referencia a lo establecido por el CICR que las violaciones del DIH, como los ataques directos a la población civil y de malos tratos, el daño a los bienes de las personas que son ajenas al conflicto, no son causadas por orden legítima de una autoridad militar o del Estado, aunado a conflictos de otra naturaleza, como violencia sexual y la pésima prestación a los servicios de salud, entre otras consideraciones, son motivos suficientes para determinar que son razones principales originadores del desplazamiento forzado hoy en el mundo. Colombia no es ajena a dicha perspectiva.

Se puede afirmar que el DIH pretende bajo su concepción de visión y de su filosofía, acabar con cualquier manifestación violenta, los actos de guerra y propender siempre por el derecho a la vida, es decir, aquella que no hace parte de los grupos armados irregulares, ni de los actores del conflicto, es decir, está institucionalizado para proteger a la sociedad civil.

En el DIH se encuentran muchas normativas relacionadas con la prevención al fenómeno del desplazamiento forzado y a la adopción de mecanismos de protección a la población civil víctimas del conflicto interno, ya que las consecuencias generadas con ocasión de los actos derivados de este fenómeno fueron innumerables y de gran connotación e importancia. Fue así como se establecieron una serie de disposiciones legales que regulan el tema del

desplazamiento forzado en el mundo y de la protección a los miembros de la sociedad civil organizada, entre estas se tienen en orden de importancia el IV Convenio de Ginebra (CG IV) de 1949, posteriormente ampliado por los Protocolos adicionales I y II de 1977 (P I y P II), así como el derecho internacional humanitario consuetudinario (DIHC).

Igualmente, en materia de regulación internacional se encuentran las siete normas fundamentales de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977 y 2005 (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2016); estas normas van enfocadas a que, por un lado, en zonas de conflicto a quienes no estén participando en la guerra, es decir, la población civil se les debe respetar su vida, su integridad tanto moral como física. Debe dárseles un trato digno, humano y no discriminatorio; además si un miembro del ejército contrario decide rendirse o declararse fuera de combate, se le debe respetar la vida.

Otro aspecto que toca este convenio hace referencia a que cualquiera de los actores del conflicto que encuentre personas heridas o enfermas las asistirán dándoles un trato digno y humanitario; no solamente para quienes estén participando del conflicto, sino a los miembros, las instalaciones, los vehículos o cualquier tipo de transporte, material médico y sanitario. Éstas deben ser protegidas y para ello se les pondrá el distintivo de la cruz roja y la media luna roja.

Establece también el convenio la protección del respeto a la vida, la dignidad los derechos y creencias tanto de los combatientes capturados como la población civil que se encuentre bajo el mando de alguna de las partes en contienda y la prohibición de incurrir en hechos generadores de violencia ni represión. Esta protección se amplía a que los sujetos mencionados puedan tener comunicación con sus familias, quienes tienen el derecho a saber en qué condición se encuentra. Igualmente incluye dentro de estas siete normas aquella que va dirigida al beneficio legal que por naturaleza y derecho tiene cualquier persona para ser investigado, juzgado, eximido de hechos que no haya cometido, y también está prohibida la tortura tanto física como mental, cualquier tipo de castigo a su integridad física, emocional y mental (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2016).

Otra de las normas señaladas en el Convenio de Ginebra es que en todo momento se debe tener claridad frente a quienes son los combatientes, los partícipes en la guerra y la población

civil que no está haciendo parte activa del conflicto buscando siempre por un lado evitar que éstos últimos se conviertan en objetivo militar y por otro preservarles la vida y sus posesiones. Este tratado pone los parámetros sobre las técnicas y la forma cómo se desarrolla la guerra puesto que esto no es ilimitado, sino por todo lo contrario se trata de que haya la menos deshumanización posible en esto.

El IV Convenio de Ginebra, en particular en sus artículos 4 y 27 dispone que los desplazados del conflicto interno son parte integrante de la sociedad civil, y gozan de todas las prerrogativas y derechos de la protección de que son titulares las personas que no participan en los conflictos ni en las hostilidades. Es decir, que existe un reconocimiento a la luz del derecho internacional humanitario a estas comunidades (Comité Internacional de la Cruz Roja. 2012).

A su vez, el Protocolo Adicional I primero, establece:

“En materia de protección a las personas que hacen parte del conflicto interno y que son objeto del desplazamiento forzado, les asiste el derecho de escoger libremente su lugar de residencia y domicilio y son titulares para ejercer su libertad de locomoción y circulación, dentro y fuera del lugar donde se encuentren establecidos”.

Es igualmente importante acotar que cuando se trata de conflictos de naturaleza armada no internacional, se prohíbe el arresto y la detención injusta y arbitraria en cualquier situación que se presente (DIHC, norma 99).

Cabe aclarar que cuando los países suscriben las normas del DIH como legislación interna en sus respectivas jurisdicciones, deberán respetar y acatar sus disposiciones, en especial las relativas al desplazamiento forzado y el retorno en condiciones seguras y dignas de las personas que son sujeto del desplazamiento forzado. El DIH exhorta a las partes que hacen parte de un conflicto interno, ya sea internacional o no internacional, para que se abstengan expresamente de ordenar el desplazamiento forzado de civiles, a no ser que sea requerido por alguna autoridad militar de manera imperativa. En este sentido, el artículo 3 común a los convenios de Ginebra, establece limitaciones para el uso de la fuerza por parte de los actores armados, en la búsqueda de la humanización de los conflictos. No obstante, existe una

lamentable tendencia global por el irrespeto a dichas obligaciones, siendo la población civil la que enfrenta las mayores consecuencias (Camelo, 2011).

Uno de los principales efectos del desplazamiento forzado es que los desplazados internos y las víctimas que sufren directamente sus consecuencias son igualmente objeto de necesidades y de situaciones de vulnerabilidad, lo cual amerita una respuesta y un tratamiento especial por parte de las autoridades, quienes tienen la obligación en todo momento y lugar de tratarlos dignamente y con principios de humanidad y jamás pueden ser objeto de discriminación o cualquier acto que vaya en contra de las normas y principios del DIH, como consecuencia de su desplazamiento o cualquier otra índole.

En el caso particular de Colombia, quien es parte de la ONU, al momento de suscribirse a sus disposiciones asumió el compromiso y la obligación de adoptar medidas para la protección, respeto y garantía del ejercicio pleno y absoluto de los derechos de los ciudadanos colombianos que hagan parte del conflicto interno, disposición que fue ratificada en el año de 1948 cuando firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, durante décadas se han cometido en el país graves violaciones a los derechos humanos de los sujetos protegidos, como los combatientes fuera de combate y las poblaciones civiles (Contreras, 2006).

Existen algunas disposiciones relativas al cumplimiento de la suscripción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tales como:

1. Ley 74 de 1968, por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966".
2. Ley 16 de 1972, donde se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmado en dicha ciudad, el 22 de noviembre de 1969.

Ahora bien, existen unos parámetros relacionados con la protección de los derechos humanos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, estos son: (Daza, pág. 93, 94, 96 2013):

1. Los Estados que hacen parte de la Declaración tienen el compromiso de cumplir los acuerdos sobre los derechos y las libertades de los individuos, de respetar y garantizarles el pleno ejercicio de su libertad y el libre desarrollo a una vida digna sin discriminación alguna.
2. Los Estados generaran las políticas públicas, la infraestructura, condiciones, orientaciones necesarias con todos los organismos de poder para asegurar y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de las personas.
3. Una vez el Presidente firma la Declaración adquiere el compromiso ineludible de crear sino existen o adecuar las existentes, aquellas normas, leyes, y regulaciones para que el Tratado se cumpla internamente y en ningún momento tomará medidas que pongan en peligro lo preceptuado en dicho tratado

La implementación de estas medidas se realiza a través de la promulgación e implementación de una serie de medidas definidas en un marco jurídico y desarrollado a través de políticas públicas que las apoya.

En el caso de Colombia fue adoptada como legislación interna relacionada con la protección a la población desplazada, la siguiente:

- Mediante la ley 387 de 1987, se crea el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD) y el Consejo Nacional de Atención Integral de la Población Desplazada por la Violencia. Esta ley establece una política pública en favor de este sector y al mismo tiempo garantiza los recursos públicos para su atención y reparación (Torrado, 2001).
- Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz. Hace referencia a los lineamientos relacionados con procesos de paz y reincorporación a la vida civil de los actores que hicieron parte del conflicto armado, sin desconocer los derechos que tienen las víctimas en cuanto a la verdad, la justicia y la reparación.
- Ley 1448 o Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Esta normativa por primera vez en Colombia establece y reconoce como tal al conflicto armado interno, estableciendo derechos y deberes para esta comunidad, pretendiendo siempre una reparación integral a todas las víctimas del conflicto armado.

- Política de cooperación para la prevención del desplazamiento y atención a la población desplazada. Esta política pública se refiere a la articulación con otras entidades del Estado y que se constituyen en garantes de los procesos de garantía a una reparación para las personas afectadas con el fenómeno del desplazamiento forzado, tales como el DNP y la Cancillería (ACNUR, 2004).
- Agencia Colombiana de Cooperación Internacional- (ACCI). Esta es una entidad adscrita al DNP, cuya finalidad sustancial es la de cooperar en conjunto con lo que hoy se llama Prosperidad Social, para apoyar todos estos procesos de ayuda económica y de asistencia humanitaria hacia estas comunidades.
- En el año 2006, primer mandato del Presidente del doctor Álvaro Uribe, se crea el Sistema de Cooperación Internacional, con el propósito de articular en pro de estas comunidades y lograr ayuda, tanto del sector público como privado (ACNUR, 2004).
- En el año de 1997, se logró suscribir un Acuerdo con la ONU, con el fin de que funcionara en nuestro país una sede del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la cual tendría como fines la de analizar el diagnóstico real y objetivo del verdadero estado de violación a los DD. HH y la de brindar asesoría a las entidades estatales responsables de atender a este sector marginal (ACNUR, 2004).
- En el año 2003 se llevó a cabo una Mesa de Coordinación en la ciudad de Londres y en donde el gobierno colombiano asume el liderazgo del Plan de Acción Humanitaria (PAH), ante la iniciativa propuesta por el Sistema de las Naciones Unidas, con el fin de trazar unas coordenadas para el manejo del desplazamiento y del conflicto interno, además de asesorar en asuntos relacionados con la ayuda y cooperación en materia internacional frente a la población en riesgo de desplazamiento forzado (CODHES, 2004)..

Pese a la “arquitectura jurídica” que se ha creado en Colombia en materia de desplazamiento, que nace de fuentes legales, jurisprudenciales, institucionales y por la creación e implementación de políticas públicas, la problemática del desplazamiento persiste. El problema no se reduce al incumplimiento de la normativa, sino a otros aspectos, como la desconexión entre las políticas nacionales y la operatividad de las mismas, que ha sido señalada por el Representante del Secretario General de la ONU para los derechos de los

desplazados internos. En cualquier caso, la consecuencia es una tragedia que ya afecta a múltiples generaciones de colombianos (Durán, A., Parra, J., Bohórquez, V., Centeno, A., 2007).

Sin lugar a dudas se puede afirmar que la protección y defensa de los derechos humanos es una obligación que tiene el Estado y como tal debe adoptar una política pública en favor de las personas que hacen parte del conflicto interno y que son sujetos del desplazamiento forzado y cuando hay menoscabo y violación a los derechos de estas personas, debe responder como persona jurídica de derecho público ante las autoridades internacionales, con ocasión de estos perjuicios y las víctimas están en la obligación de hacer sus respectivas reclamaciones y el Estado garantizarles una efectiva reparación, ya sea tanto a nivel administrativa como judicial.

En el caso del conflicto armado interno en Colombia, los principales actores de actos violentos y violatorios de derechos humanos, no respetan ni tienen en cuenta a los principios de distinción, proporcionalidad, limitación e inmunidad de la población civil, propios del DIH. (Giraldo, 2008)

Una muestra de la finalización del conflicto armado interno en Colombia, es la suscripción de la firma del Acuerdo de Paz, entre el gobierno presidido por el doctor Juan Manuel Santos Calderón y las FARC, significando con esto el final de una pesadilla que en principio no se le veía futuro ni fin, pero gracias a la voluntad de los actores se pudo cristalizar este sueño tanto anhelado por todos los colombianos.

Fue tanta la esperanza que puso gran parte de la población colombiana frente a la firma de estos acuerdos por lo que ello implica para la nación y sus habitantes ante la inminente necesidad que tiene el país a la reactivación económica, la reconstrucción social, el retorno de los desplazados en condiciones dignas a sus lugares de origen. Todo ello producto de la reincorporación de los excombatientes a la sociedad luego de la desmovilización de la guerrilla. No obstante, no se niega que esta reincorporación conlleva sus propios desafíos, en muchos casos, para las mismas regiones que se vieron más afectadas por el conflicto ya que dicho proceso no sólo tiene una dimensión social, sino que además posee dimensiones económicas y laborales (Ríos, 2017).

Pero más allá de lo minuciosamente elaborado del acuerdo, su cumplimiento está en manos de la actuación del sistema político administrativo nacional. No sorprende que existan dudas respecto a si se lograra la erradicación completa de los focos de violencia producidos por la actividad de las FARC. Sin embargo, el núcleo del acuerdo, la deposición de las armas del grupo armado irregular de mayor longevidad en la larga historia del conflicto, tendrá efectos positivos inmediatos para el país (Meto, 2016).

Otro aspecto fundamental es el relativo al cumplimiento de los compromisos relacionados con la verdad, la reparación, la justicia y las garantías de no repetición. A tal fin se crea una Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Se trata de un mecanismo de carácter extrajudicial, para el esclarecimiento de los hechos del conflicto y ayudar al reconocimiento y a la reparación de las víctimas. Todo con el objeto de favorecer el establecimiento de una convivencia pacífica y duradera, pero sin desconocer la justicia y los derechos de quienes fueron más afectados por el conflicto (Palou, 2018).

Finalmente, a continuación, se mostrarán algunas cifras, más las ya expuestas anteriormente que exponen una radiografía de algunas de las problemáticas por las que atraviesan los desplazados en Colombia. Estas son:

En los años corridos entre 1998 y 2008, del total de la población, el 78% era desalojada de sus propiedades, lo que es lo mismo que por día 474 personas o 95 hogares eran víctima de desplazamiento; a finales de 1990 11,700 colombianos aproximadamente, buscaron refugio en países de la región como Panamá, Venezuela y Ecuador y en el 2003 13,000 personas; el 70%. El mayor número lo componen campesinos, minorías étnicas y afrocolombianos lo mismo que indígenas; según la Organización Panamericana de la Salud el hacinamiento en los desplazados es 1,7 veces más que la población receptora, el 30% no tiene acceso a los servicios de salud; de cada 10 desplazados dos no poseen documento de identidad. (Gómez, Astaiza, de Souza, 2008)

Muchos otros desplazados huyeron a otras regiones de Colombia. Para 2008, Bogotá y Antioquia fueron las principales regiones receptoras de desplazados, con 56.087 y 52,276, respectivamente. Otras que recibieron un número elevado de población desplazados fueron el Valle del Cauca con 31.527, Magdalena con 27.256, y Nariño 24,662. La lista de regiones

con más llegada la cierran los departamentos de Meta (16.370), Cauca (16.344) y Córdoba (12.879). No obstante, todo el país ha sido testigo de este fenómeno, y se estima que el 80% de los municipios del de Colombia fueron afectados por el desplazamiento interno (CODHES, 2009, Mendoza, 2012).

En cuanto al número de afectados, sólo desde el año 2000, unas 385 mil familias de las zonas rurales de Colombia fueron víctimas de desplazamiento. En términos de tierra, aproximadamente 5,5 millones de hectáreas han sido abandonadas, más de la décima parte de las zonas agropecuarias de Colombia. Esto ha significado pérdidas relacionadas con el lucro cesante de unos \$49,7 billones, el 11,6% del PIB (CODHES, 2009). El crecimiento de la industria minera nacional también ha visto un aumento de la población desplazada en estas zonas. Un informe de CODHES del 2011 señaló el interés de los grupos guerrilleros y paramilitares por incursionar en esta actividad como nueva fuente de ingresos, lo que se ha traducido en un aumento de la violencia en estos territorios y en el desplazamiento de las poblaciones que se dedicaban a la minería artesanal. (CODHES, 2011).

Para las víctimas, el huir de las zonas de violencia sólo es el principio de sus calamidades. Un estudio determinó que para el 2007, el 98% de las familias en condición de desplazamiento se encontraba debajo de la línea de la pobreza y un 74% en condición de indigencia. Además, las áreas receptoras también sienten los efectos. El mismo estudio encontró que las familias vecinas a las desplazadas presentaban niveles de pobreza e indigencia del 88% y el 40% respectivamente. (Mendoza 2012).

Para el 2013 se contabilizaron 4,384,383 personas desplazadas de las cuales el 50% se asentaron en los municipios de 6ª categoría; sólo las masacres perpetradas en Mempujan y San Cayetano, El Naya, El Aro, Macayepo, El Soldado, Chengue - Mapiripán, Puerto Alvira o Caño Jabón, han dejado un saldo de 8,741 desplazados y en su mayoría no hay una definición jurídica. (Centro de Memoria Histórica, 2015).

Conclusiones

La elaboración de este artículo estuvo fundamentada en la necesidad de responder al interrogante de ¿cuál ha sido la protección del DIH frente al desplazamiento en el marco del conflicto armado en Colombia?; para ello hubo que pasar por responder al por qué y cómo se fue desarrollando este conflicto, quedando en evidencia algunas cifras de los efectos que ha dejado hasta el momento la violencia y el desplazamiento forzado interno.

Durante el conflicto armado se han provocado a escalas inimaginables, sufrimiento, muerte y desplazamientos forzados, este conflicto ha afectado a millones de personas de distintas formas, tales como mutilaciones, violaciones, torturas, entre otras formas de violaciones a la dignidad humana. Las estadísticas, revelan que la guerra ha alterado a millones de familias, tanto en su estructura como en la salud mental que se ha visto afectada a causa de las distintas situaciones traumáticas que han tenido que afrontar.

El conflicto armado en Colombia se ha prolongado a lo largo de varias décadas, al indagar sobre las causas, se encontró que el origen se encuentra en una disputa bipartidista por el poder que se ha ido transformando con el paso del tiempo y ha golpeado cada vez más fuerte, en especial, a la población rural del país. Es importante resaltar, que la violencia que se vive en el país se debe a una situación de violencia estructural que se remonta en sus orígenes como una nación independiente y desemboca en el entonces histórico “Bogotazo”.

La particularidad de este conflicto no se enfoca únicamente en su extensa duración, sino que existe un factor relevante tal como lo son los actores del conflicto, a los cuales se les suma un tercer actor, pues, deja de ser, grupos armados – Estado, en el caso del conflicto colombiano la presencia de los grupos paramilitares, lo cual complejiza aún más el panorama de camino a la paz, dado a que, solamente cuando se reconozcan todas las partes involucradas en el conflicto, sin minimizar y/o negar a ninguno de los actores.

El Estado colombiano se encuentra en la obligación de garantizarle a las víctimas del desplazamiento forzado el retorno a sus lugares de origen de forma segura, así mismo, es su responsabilidad buscar todos los mecanismos necesarios para evitar la impunidad de los actores del conflicto interno, incluyendo a los responsables políticos. El desplazamiento debe

ser visto como parte del conflicto interno ya que, si no se ven las causas reales, es imposible avanzar sobre un verdadero proceso, esto no afecta más que a la población, la cual queda sin protección, sin reconocimiento de sus derechos, de la historia vivida y da cada vez más paso a la impunidad.

El reconocimiento de derechos por parte del Estado ha sido bastante amplio en su deber ser, es así como Colombia hace parte del pacto por la protección del Derecho Internacional Humanitario- DIH y ha participado en diferentes espacios a nivel mundial para el reconocimiento de estos derechos y la ratificación de las convenciones internacionales. Tan es así que existe internamente toda una legislación e instituciones públicas que buscan salvaguardar los derechos de las personas desplazadas y ofrecerles de manera “formal” condiciones de vida dignas y el retorno a sus lugares de origen. Sin embargo, existe una gran brecha entre el deber ser y el ser por cuanto la violación sistemática a los derechos humanos por parte del Estado y la ineficacia en la protección a la población civil y las víctimas del conflicto han sido demostradas.

Se puede decir entonces sin temor a equívocos que Colombia durante todo el conflicto armado ha violado sistemáticamente el DIH, el cual ha sido vulnerado tanto por el Estado como por los demás actores del conflicto armado. Es indispensable que Colombia haga énfasis en el Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Interno Colombiano para encausar una solución pacífica del conflicto y para buscar la restitución de los derechos de las víctimas.

La sociedad Colombiana históricamente ha vivido en una cultura de violencia, pobreza y exclusión, por lo cual, una transición a una sociedad pacífica e igualitaria debe estar basada en la creación de nuevas formas de educación y políticas que se basen en la reparación, la reivindicación, el esclarecimiento e ir más allá ejercer la justicia frente todo aquel que por acción u omisión haya participado de algún acto trágico de violación que conduzca entre otros a que comunidades completas migren a otras regiones.

La firma del Acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC puede ser una oportunidad de transformación política, social y cultural real para Colombia y contribuir a lograr un país libre de violencia, todo ello enmarcado dentro de la voluntad gubernamental y

estatal en su implementación y de esta manera cumplir con los pactos firmados en los acuerdos internacionales.

REFERENCIAS

- ACNUR (2004). Balance de la política de atención al desplazamiento forzoso en Colombia, 1999-2002.
- Amnistía Internacional, (1997). En busca de un refugio. Colombia. ¿Qué debemos hacer para seguir viviendo? Los desplazados internos de Colombia desposeídos y exiliados en su propia tierra. Madrid: octubre de 1997
- Arango, D., A. M. (2007). “10 años de desplazamiento forzoso en Colombia. La política, la cooperación internacional y la realidad de más de dos millones de colombianos”. OASIS, No 13
- Barreira, C., Tavares, J., Zuluaga, J., González, R., González, F., (2013). Conflictos sociales, luchas sociales y políticas de seguridad ciudadana. Universidad Autónoma del Estado de México - Instituto Latinoamericano de Estudios Avanzados.
- Bernal, C., Moya, M., (2018). Derechos humanos y derecho internacional humanitario, apuntes preliminares. Derecho internacional humanitario en el conflicto armado colombiano, JUS Penal 19
- Camelo, H., (enero – junio 2011). Transformación de las dinámicas de confrontación en los conflictos armados. Universidad Católica
- Carmona, R. y Simmons, A., (1977). Destino la metrópoli, un modelo general de las migraciones en América Latina Bogotá, Canal Ramírez-Antares.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2015). Una nación desplazada: informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia, Bogotá, CNMH - UARIV, 2015.
- CODHES (2004). “¿Cooperación internacional o política de Estado?” Boletín informativo. No 51, Bogotá, Colombia.
- CODHES (2011). “¿Consolidación de qué?, Informe sobre desplazamiento, conflicto armado y derechos humanos en Colombia 2010”. Boletín informativo No. 77, Bogotá, 15 febrero 2011
- Comité Internacional de la Cruz Roja. (2012). Los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Obtenido de <https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/publications/convenios-gva-esp-2012.pdf>
- Comité Internacional de la Cruz Roja (2016). Derecho Internacional Humanitario. Guía práctica para los parlamentarios No. 25

- Comité Internacional de la Cruz Roja (2004) Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario. Obtenido <https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/dih.es.pdf>
- Contreras, J., (2006). El Derecho Internacional Humanitario: principio de una educación para la paz. Universidad de La Sabana, Facultad de Educación.
- Daza, A., (Julio – diciembre 2013). Obligaciones internacionales del Estado colombiano frente al desplazamiento forzado de poblaciones. NOVUM JUS, Volumen 7 Nro. 2. Universidad Católica.
- Durán, A., Parra, J., Bohórquez, V., Centeno, A., (2007). Desplazamiento Forzado en Colombia. Derechos, acceso a la justicia y reparaciones. Generalitat Valencia. Cedhul. Unhcr Acnur.
- El Tiempo. Obtenido de <https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/colombia-es-el-pais-con-mas-desplazados-internos-informe-acnur-378716>. 20 de junio de 2019.
- Garrido, J., (octubre – diciembre 2001). Guerra y pobreza en Colombia, Revista Estudios Gerenciales. Vol. 17 No. 81 Cali.
- Gómez, G., Astaiza, G., de Souza, M., (Septiembre – octubre 2008). Las migraciones forzadas por la violencia: el caso de Colombia. Ciencia & Salud Colectiva. ISSN 1678-4561
- Ibáñez, A., Moya, A., (2007). La población desplazada en Colombia: Examen de sus condiciones socioeconómicas y análisis de las políticas actuales. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá. ISBN: 978-958-8025-95-7.
- Ibáñez, A., Velásquez A., (2008). El impacto del desplazamiento forzoso en Colombia: condiciones socioeconómicas de la población desplazada, vinculación a los mercados laborales y políticas públicas. Naciones Unidas ISBN: 978-92-1-323245-3
- Juliao, C., (enero – junio 2012). Políticas públicas y de cooperación frente al desplazamiento interno en Colombia. El trabajo social en su análisis y reformulación. Revista Aldea Mundo. Universidad de los Andes. Venezuela.
- Marín, M., (2017). Las violaciones de derechos humanos en Colombia durante los años 80 del siglo XX: acercamiento a su comprensión histórica desde la degradación y el fortalecimiento de la defensa. Anuario de Historia Regional y de las Fronteras. Universidad Industrial de Santander.

- Mendoza, A., (2012), El desplazamiento forzado en Colombia y la intervención del Estado. *Revista de Economía Internacional*, vol. 14. No. 26.
- Meto, J., (julio – diciembre 2016), Resumen del Acuerdo de Paz. *Revista de Economía Institucional*. Vol. 18 No. 35. Bogotá.
- Naranjo, G., (08-2001). El desplazamiento forzado en Colombia, reinención de la identidad e implicaciones en las culturas locales y nacionales. *Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*. Universidad de Barcelona [ISSN 1138-9788].
- Niño, J., (agosto 1999). Las migraciones forzadas de población, por la violencia, en Colombia: una historia de éxodos, miedo, terror, y pobreza. *Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*. Universidad de Barcelona [ISSN 1138-9788].
- ONU. Consejo Económico y Social (1998). Derechos humanos, éxodo en masa y personas desplazadas. Obtenido <https://undocs.org/es/E/CN.4/1998/53/Add.2>
- Palou, J. (julio – diciembre 2018). Memoria y justicia transicional en los acuerdos de paz de Colombia. NOVUM JUS. Universidad Católica.
- Giraldo, Y., (2008). Violación del Derecho Internacional Humanitario por parte del Estado colombiano. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. www.scielo.org.mx/pdf/amdi/v8/v8a6.pdf
- Red Nacional de Información, (2020). Víctimas de conflicto armado. Desplazamiento – Personas. Obtenido de Cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Desplazamiento
- Ríos, J., (2017). El Acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC: o cuando una paz imperfecta es mejor que una guerra perfecta. *Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades*. Universidad EAN
- Ruiz, N., (2007). El desplazamiento forzado en el interior de Colombia: Caracterización sociodemográfica y pautas de distribución territorial 2000-2004. Tesis doctoral. Obtenido de CODHES. <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/>
- Ruiz, N., (enero – abril 2011). El desplazamiento forzado en Colombia: una revisión histórica y demográfica. *Estudios demográficos y urbanos*. ISSN 2448-6515
- Torrado, A., (enero – junio 2001) Análisis de la ley 387 de 1997: su impacto psicosocial en la población desplazada. *Reflexión política*. Vol. 3, Núm. 5. ISSN 0124-0781
- Sentencia T-025/04. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. Obtenido de <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm>

Villa, M., (2006). Desplazamiento forzado en Colombia. El miedo: un eje transversal del éxodo y de la lucha por la ciudadanía. Controversia.